

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintisiete (27) de marzo dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE : PROTECCION S.A
DEMANDADO : MANGORA SAS
RADICADO : 05-001-41-05-003-2023-00102-01
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA AL JUZGADO PRIMERO
LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGUI.
ACTA : 067

Se reúne la Sala para resolver el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí y el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, con fundamento en los siguientes,

ANTECEDENTES

LA DEMANDA

La parte demandante presenta demanda ejecutiva solicitando se libre mandamiento de pago en contra de la demandada por los siguientes conceptos:

“a) La suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS (\$ 2.816.000) por concepto de capital de la obligación a cargo del empleador por los aportes en Pensión Obligatoria, y que consta en el título ejecutivo que se anexa a la presente demanda, emitido por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A, el cual, con base en el artículo 24 de la ley 100 de 1993 presta mérito ejecutivo.

b) La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 251.500) por intereses moratorios a corte 05 de diciembre de 2022.

El cobro de intereses moratorios o sanción moratoria por parte de la Administradora del Fondo de Pensiones Obligatorias se realiza desde la fecha de la exigibilidad de cada aporte de acuerdo con la normatividad vigente ley 1607 de 2012, Circular 003 de 2013 de la

DIAN, según las cuales los intereses de mora se liquidan de manera simple a la tasa vigente para cada día de mora, con base en la tasa de interés de Usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para créditos ordinarios o de consumo, y a partir del 1 de enero de 2017 con la Ley 1819 de 2016 artículo 279 dicha tasa se reduce en dos (2) puntos.

Para obligaciones exigibles anteriores al 29 de julio de 2006, bajo la vigencia de la Ley 1066 de 2006 y la Circular 69 de 2006 de la Dian, el cálculo del interés se debe realizar de igual manera en forma simple, hasta el 28 de julio de 2006 a la tasa del 20.63%, realizando un corte y acumulación de intereses a esa fecha.

c) Más los intereses de mora que se causen a partir de la fecha del requerimiento prejudicial hasta el pago efectuado en su totalidad.

2-Se condene a los demandados al pago de las costas y Agencias en Derecho”.

ACTUACIÓN DEL JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGUI.

Por reparto correspondió a dicho Despacho Judicial, el proceso de la referencia, quien, al entrar en estudio para su admisión, mediante auto del 10 de febrero de 2023, declaró la falta de competencia para conocer del asunto al considerar que cuando se pretenda el pago de cotizaciones en mora al sistema, la competencia radica en el juez del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social o el de aquel donde se emitió el documento de cobro, y que realizado el procedimiento de cobro de las cotizaciones en mora previo a la acción ejecutiva, en los términos de los artículos 24 de la Ley 100 de 1993 y 2 y 5 de su Decreto Reglamentario 2633 de 1994, el juez competente para conocer del presente trámite sería el laboral de pequeñas causas de Medellín, en razón al domicilio principal de la sociedad ejecutante.

ACTUACIÓN DEL JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLIN

El proceso le fue repartido a dicha agencia judicial, para efectos de continuar con el respectivo trámite del proceso, quien, por auto del 20 de febrero de 2023, suscito el conflicto negativo de competencia al considerar no ser competente para conocer del asunto sino el juez laboral de Itagüí en razón a que fue en dicho municipio donde se creó el título ejecutivo base de recaudo y desde el cual se adelantó la gestión de cobro.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Esta Sala es competente para resolver el conflicto negativo de competencia planteado, de conformidad con lo establecido en el literal B. numeral 5 del inciso único del art. 15 del CPTSS, que a la letra reza:

"ARTICULO 15. Competencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de las salas laborales de los tribunales superiores de distrito judicial.

(...)

B. Las salas laborales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen:

(...)

5. De los conflictos de competencia que se susciten entre dos juzgados del mismo distrito judicial".

El conflicto negativo de competencia radica en que por un lado el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí argumenta no ser competente en tanto que afirma que como el domicilio del ente de seguridad social es Medellín, y que, desde el mismo Municipio de Medellín, donde se elaboró el título ejecutivo, es el juez de dicho municipio donde se debe tramitar el asunto. Contrario a lo anterior argumenta el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín argumenta tampoco ser competente sino el juzgado en Itagüí en tanto que fue en dicho municipio donde se creó el título ejecutivo base de recaudo y desde el cual se adelantó la gestión de cobro.

Partiendo de lo anterior se tiene que según la jurisprudencia ya decantada de la Corte Suprema de Justicia cuando se pretenda el pago de cotizaciones en mora al sistema de seguridad social, la competencia radica en el juez del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social o el de aquel donde se adelantaron las gestiones de cobro.

Lo anterior toda vez que según lo indicado por la Corte en estos casos no resultaría aplicable la cláusula general de competencia establecida en el artículo 05 del C.P.T y ss según la cual la misma se determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio, o por el domicilio del demandado, a elección del demandante, pues se ha indicado que la naturaleza de dicha disposición es que se tiene la posibilidad de escoger de manera libre

cualquiera de los anteriores, como fuero electivo, y por lo tanto para estos casos de cobro de aportes pensionales ante la inexistencia de un lugar de prestación de servicios, visto desde la óptica de los que realiza un trabajador, excluiría la aplicabilidad del mencionado fuero, puesto que **no habría otra opción de elección que el lugar del domicilio de la demandada.**

Conforme lo mencionado a expuesto la Corte Suprema de Justicia entre otras en providencia AL 722 del 24 de febrero de 2021 radicado 89209, lo siguiente:

“Frente al tema, esta Sala emitió un pronunciamiento reciente en providencia (CSJ AL2940-2019, 10 jul. 2019, rad 84882) en la cual aclaró:

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, dimana pertinente revisar el acápite de cuantía y competencia del libelo introductorio, en el que se afirma con relación al factor territorial, el cual es precisamente el discutido por los juzgados en colisión, que la competencia radica en el lugar del cumplimiento de la obligación, acorde a lo establecido en el numeral 3 del artículo 28 del Código General del Proceso, cuyo tenor literal señala: «[...] En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita».

En ese entendido, la entidad demandante asegura que el proceso debe tramitarse en la ciudad de Bogotá, no obstante, no aporta documento alguno que acredite que ese sea el lugar del cumplimiento de la obligación, por lo que entonces esa normativa resulta inaplicable.

Ahora bien, al ceñirse al artículo 5o del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los procesos en los que la competencia recaiga en varios jueces, bien sea por el domicilio de la demandada o por el último lugar en donde se haya prestado el servicio, la parte demandante, a efectos de fijar la competencia, tiene la posibilidad de escoger libre y con plenos efectos, cualquiera de los anteriores, siendo esto una garantía que la jurisprudencia y doctrina han denominado como fuero electivo. Sin embargo, dicha norma tampoco se ajusta al caso concreto ante la inexistencia de un lugar de prestación de servicios, visto desde la óptica de los que realiza un trabajador, lo que excluye la aplicabilidad del mencionado fuero, puesto que no habría otra opción de elección que el lugar del domicilio de la demandada, el cual de acuerdo al certificado de existencia y representación legal se encuentra en Fundación - Magdalena (f.º 25).

En el caso bajo examen, si bien no existe una norma en materia procesal del trabajo que consagre de manera clara y precisa la competencia para conocer del trámite de la acción ejecutiva del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, encaminada en esta oportunidad al cobro de cotizaciones al Subsistema de Seguridad Social en

Salud, lo cierto es que por aplicación analógica conforme lo permite el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la regla que se adapta es la establecida en su artículo 110, puesto que determina la competencia del juez del trabajo en asuntos de igual naturaleza, es decir, en los que se busca garantizar los derechos a la seguridad social de los afiliados a través del cobro ejecutivo a los empleadores de aquellas cotizaciones que no fueron satisfechas oportunamente.

La citada norma señala:

Juez competente en las ejecuciones promovidas por el Instituto de Seguros Sociales. De las ejecuciones de que trata el artículo anterior y el 32 de la Ley 90 de 1946 conocerán los jueces del trabajo del domicilio del Instituto Colombiano de Seguros Sociales o de la caja seccional del mismo, que hubiese proferido la resolución correspondiente y de acuerdo con las reglas generales sobre competencia por razón de la cuantía.

Debe precisarse entonces, que el transcrito precepto adjetivo legal, además, es el aplicable al caso, porque para la época de expedición del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (año 1948), la única entidad administradora del Sistema de Seguridad Social lo era el Instituto de Seguros Sociales, mientras que, con la Ley 100 de 1993, se originó la creación de diferentes administradoras de los subsistemas que lo integran, sin que se determinara tampoco, como se anunció precedentemente, en quién recaía la competencia para conocer de la ejecución por cotizaciones a la seguridad social insolutas, situación que como se dijo, sí estaba prevista en su momento para el ISS, y que en tal virtud, resulta ser la más cercana para dilucidar el presente conflicto”.

Decisión que fue reiterada en diversas oportunidades, entre ellas, en los autos CSJ AL1046-2020 y CSJ AL228- 2021.

En efecto, es claro que, cuando se pretenda el pago de cotizaciones en mora al sistema, la competencia radica en el juez del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social o el de aquel donde se adelantaron las gestiones de cobro”

El anterior criterio ha sido reiterado por la misma corporación en las providencias AL229-2021 Radicación n° 88999, AL228-2021 Radicación n° 88617, AL5207-2021 Radicación n.º90582, AL5734-2021 Radicación n.º91539, AL6061-2021 Radicación n. 91436, AL6065-2021 Radicación n.º 91738, AL214-2022 Radicación n.º 92282, AL1396 del 16 de marzo de 2022.

Partiendo de lo anterior para el caso bajo estudio se tiene que las gestiones de cobro se adelantaron en Itagüí, tal y como se evidencia de la prueba documental obrante de folios 10 y siguientes de la demanda virtual, PDF 1,

Radicado Único Nacional: 05-001-41-05-003-2023-00102- 01
Radicado Interno: 064-23

donde se evidencia que el “Titulo Ejecutivo No. 16086-22” base de recaudo, fue constituido allí.

Protección

Título Ejecutivo No. 16086 - 22

La **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. con Nit. No. 800.138.188-1** procede a **LIQUIDAR** las Cotizaciones Obligatorias adeudadas al Sistema General de Pensiones para los Fondos de Pensión Obligatoria que Administra, por el aportante, así:

NOMBRE DEL APORTANTE	MANGORA SAS
IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE	NIT 900885228
TOTAL ADEUDADO	\$ 3.067.500,00
CAPITAL ADEUDADO a la fecha del periodo de corte del Requerimiento	\$ 2.816.000,00
INTERESES DE MORA ADEUDADOS	\$ 251.500,00
Intereses liquidados a la fecha:	5/12/2022
Periodo de CORTE del Requerimiento en mora	09/2022
Lugar y Fecha de Expedición del Título Ejecutivo	ITAGUI, 22 de diciembre de 2022

Esta liquidación presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario 2633 de 1994, artículo 5º, y corresponde a los estados de deuda que se anexan y forman parte integral del título ejecutivo, los cuales se elaboran con base en la información reportada y pagos efectuados por el aportante. En los estados de deuda anexos, se discriminan los afiliados, períodos y valor de las cotizaciones e intereses de mora que debe el aportante. Los intereses de mora se liquidan de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 100 de 1993, desde el vencimiento del plazo para el pago hasta la fecha de expedición del título ejecutivo. Los plazos para el pago de las cotizaciones por parte de los aportantes están definidos en el decreto 1406 de 1999 y 1670 del 14 mayo de 2007.



JULIANA MONTOYA ESCOBAR
Representante Legal
PROTECCIÓN S.A.
administrad

Adicionalmente según se observa de los documentos visibles a folios 14 y ss del PDF 1 de la demanda ejecutiva, los requerimientos realizados al deudor fueron efectuados en Itagüí.

Conforme lo anterior se evidencia que en virtud del fuero electivo en estos casos donde es posible elegir, entre i) el juez del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social o ii) aquel donde se adelantaron las gestiones de cobro, la entidad ejecutante eligió al segundo, pues presentó la demanda ejecutiva ante el Juez Laboral del Circuito de Itagüí.

Cuando la ley permite que en cualquiera de varios domicilios se radique la competencia para activar el aparato jurisdiccional del poder público, debe respetarse la elección que realiza la parte accionante.

Por lo expresado, sin necesidad de más elucubraciones al respecto, considera la Sala que el competente para continuar conociendo del presente proceso atendiendo a los lineamientos trazados por la Corte Suprema de Justicia es el **JUEZ PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGUI**, y por tal razón se declarará que la competencia para el trámite de este asunto, corresponde al **JUEZ PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGUI** a quien se remitirá el mismo para que surta lo de su competencia.

Consecuente con lo expuesto, El TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN EN SALA LABORAL DE DECISIÓN,

RESUELVE:

PRIMERO: DIRIMIR el conflicto negativo de competencia suscitado, entre el **JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGUI Y EL JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLIN**, para conocer del presente proceso ordinario, para que conozca del mismo el **JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGUI**, y al que se le remitirá el expediente, por lo dicho en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: Comuníquese esta determinación a ambos juzgados por medio de oficio y al accionante por el medio más expedito.

Por la Secretaría de la Sala, líbrese el correspondiente oficio.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Los Magistrados,


HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

Radicado Único Nacional: 05-001-41-05-003-2023-00102- 01
Radicado Interno: 064-23



GUILLERMO CARDONA MARTINEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 053 del 28 de
marzo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>